

Inseguridad social:
Dónde está y cómo enfrentarla

Carolina Tohá y Javier Couso

Introducción

Los avances experimentados en Chile durante los últimos 15 años en materia de bienestar de la población son significativos. Ello se refleja en los elocuentes resultados en la reducción de la pobreza y la indigencia y en el incremento de los ingresos de los distintos segmentos sociales. Pero junto con esta expansión de oportunidades, nuestro país ha vivido dos fenómenos que opacan estos logros: la permanencia de altísimos niveles de desigualdad en la distribución del ingreso y la existencia de situaciones de inseguridad social que amenazan a las personas de ingresos medios y bajos.

Este trabajo busca analizar el segundo de estos fenómenos, es decir, la inseguridad social. Nos referimos con ello a la desprotección de las personas y las familias ante contingencias que pueden generar una pérdida significativa de los avances obtenidos o una frustración de las expectativas sobre logros futuros.

El Chile de los últimos 15 años ha abierto oportunidades antes inimaginables a las personas. Miles han salido de la pobreza. La Educación Superior o un automóvil son hoy accesibles a sectores mucho más vastos que en el pasado. Sin embargo, al mismo tiempo que se han expandido estas posibilidades, ha crecido la vulnerabilidad ante ciertos episodios que pueden echar por tierra lo obtenido o las posibilidades de avanzar a futuro. En el Chile del pasado, la movilidad social parecía funcionar de otra forma. Los ascensos eran más lentos, pero más seguros. Si una familia lograba que su hijo fuera a la universidad, se daba por descontado que encontraría un buen trabajo. Asimismo, si una persona humilde lograba un empleo administrativo, lo más seguro era que ascendiera lentamente a otros puestos para quedarse en la empresa de por vida. Hoy son muchos más los chilenos que pueden lograr un empleo así, porque la escolaridad ha aumentado en forma acelerada, pero una

El Chile de los últimos 15 años ha abierto oportunidades antes inimaginables a las personas. Miles han salido de la pobreza. La Educación Superior o un automóvil son hoy accesibles a sectores mucho más vastos que en el pasado. Sin embargo, al mismo tiempo que se han expandido estas posibilidades, ha crecido la vulnerabilidad ante ciertos episodios que pueden echar por tierra lo obtenido o las posibilidades de avanzar a futuro.

vez que lo obtienen pueden perderlo en cualquier minuto y con ello volver al punto de partida.

En pocas palabras, somos más libres y tenemos mayores expectativas de mejorar, pero el riesgo de retroceder o quedar frustrados en nuestros sueños es también superior.

Estas nuevas formas de inseguridad social constituyen un fenómeno diferente al que se produce ante una situación de carencia, porque se refieren a eventos que podrían ocurrir en el futuro. Un cambio en la situación de empleo de un miembro del hogar, la enfermedad de un familiar o una ruptura matrimonial producen cambios significativos, en ocasiones catastróficos, en las condiciones de vida del hogar. Pero incluso cuando estos eventos no se registran, el temor a su ocurrencia está presente.

Análisis

Frente al entorno de inseguridad social descrito, lo primero que una sociedad debe plantearse es cuáles son los niveles de riesgo social que considera aceptables, de acuerdo a su concepción de lo que significa una 'vida humana digna'. Por cierto, la definición del nivel de riesgo socialmente aceptable trae aparejadas importantes consecuencias de política pública.

Un aspecto crucial para las diferentes opciones de política social es la disyuntiva que existe entre atender las carencias cuando ellas ocurren o, en cambio, potenciar capacidades para salir de la pobreza y no volver a caer en ella. A primera vista, dada la severidad de las carencias, puede parecer inevitable concentrarse en las urgencias del presente. Sin embargo, a la larga, la consideración de horizontes mayores es más eficaz, ya que se apuesta a crear capacidades permanentes en lugar de paliativos temporales.

El enfoque que enfatiza la promoción de capacidades permanentes tiene como fundamento la autonomía individual, en la cual el gobierno juega un doble rol. Por una parte, protege y extiende la libertad de las personas y, por la otra, define el rango de riesgos considerados como socialmente tolerables por la comunidad, implementando sistemas de protección adecuados. Este enfoque pone el acento en fortalecer la capacidad de las personas de participar en la sociedad con un umbral de capacidades, derechos y redes sociales que le permitan desenvolverse libremente y reponeerse de las contingencias adversas que pueda enfrentar. Al mismo tiempo,

este enfoque anticipa que hay contingencias que los individuos no están en condiciones de enfrentar solos y que es más eficiente preverlas socialmente, en forma solidaria o a través de sistemas de protección social de diverso tipo. Para ello sirven políticas públicas específicas, así como el fortalecimiento de las relaciones interpersonales, especialmente en los sectores menos favorecidos, donde las redes sociales tienden a hacerse más débiles.

En pocas palabras, el paradigma de las capacidades se apoya en la libertad individual, que es un objetivo en sí mismo, pero entiende esta libertad individual inserta en una vida social donde hay relaciones de solidaridad y colaboración que son necesarias, y no contraproducentes, para hacer posible esa libertad. Este enfoque es coherente con enfatizar los aumentos de la productividad, la innovación y el desarrollo de los mercados. También es consistente con el objetivo de una democracia más avanzada, con crecientes grados de control social de la acción pública, una opinión pública informada y la participación ciudadana. Para que las políticas públicas de este tipo sean efectivamente instancias facilitadoras de las capacidades de los individuos, la sociedad en su conjunto debe estar dispuesta a financiar los mayores gastos que tal esfuerzo de inversión social representa.

En lo que sigue analizamos la inseguridad social en Chile desde la perspectiva de tres tipos de vulnerabilidad que cada día son más significativos en la social actual: la de los adultos mayores, la de la mujer que trabaja y la de los jóvenes que por primera vez se enfrentan el mundo laboral. A su vez, para cada uno de estos grupos proponemos políticas específicas.

En lo que sigue analizamos la inseguridad social en Chile desde la perspectiva de tres tipos de vulnerabilidad que cada día son más significativos en la sociedad actual: la de los adultos mayores, la de la mujer que trabaja y la de los jóvenes que por primera vez se enfrentan el mundo laboral. A su vez, para cada uno de estos grupos proponemos políticas específicas.

La mayoría de los antecedentes y las propuestas que se presentan en la siguiente sección fueron recabados, los primeros, y elaboradas, las segundas, por un equipo multidisciplinario convocado por el proyecto “Riesgos y capacidades: Consecuencias políticas de la inseguridad social en Chile”, que la Corporación Expansiva desarrolló durante el año 2004.

1. La llegada de la Edad Mayor⁽¹⁾

Chile vive hoy un proceso de transición demográfica avanzada, caracterizada por un marcado envejecimiento de su población. Este fenómeno se debe al efecto combinado del aumento en la expectativa de vida de las personas y a una fuerte baja en las tasas de fecundidad que el país ha experimentado. En efecto, en los últimos 12 años, la población mayor de 60 años de edad

Chile vive hoy un proceso de transición demográfica avanzada, caracterizada por un marcado envejecimiento de su población. Este fenómeno se debe al efecto combinado del aumento en la expectativa de vida de las personas y a una fuerte baja en las tasas de fecundidad que el país ha experimentado.

se incrementó en casi medio millón de personas, tendencia que ha llevado a dicho grupo etario a representar más del 12% del total de la población del país. Esto es, cerca de 1.700.000 personas.

Si bien actualmente el segmento de la población mayor de 60 años presenta índices de pobreza marcadamente más bajos que los de la población general (solo un 8% comparado muy

favorablemente respecto del 20% del total nacional), existen factores que generan fuerte inseguridad en la etapa del envejecimiento. Primero, las estadísticas sociales esconden una realidad innegable: pese a no caer en los indicadores de pobreza, la llegada de la vejez acarrea para muchas personas un “empobrecimiento” que se traduce en que sus últimos años son los de mayor carencia en relación a la situación económica que tuvieron en su vida activa. Al mismo tiempo, las perspectivas futuras no son alentadoras debido a que vastos segmentos de la población económicamente activa deberán enfrentar la edad de retiro sin haber acumulado fondos suficientes para alcanzar pensiones superiores a la mínima. Por otra parte, según el Banco Mundial, el envejecimiento de la población en Chile involucra un encarecimiento de la salud de un 2% anual. No es casualidad que la perspectiva de enfrentar la Tercera Edad asegurados contra el deterioro de la salud es una aspiración de los chilenos de todos los estratos socioeconómicos.

(1) Las proposiciones contenidas aquí se basan en los trabajos de César Oyarzo, “Una propuesta de política para reducir la inseguridad en la población Adulta Mayor”, y Juana Silva. “Inseguridades sociales y Tercera Edad”. Estos fueron realizados en el marco del proyecto de investigación de Expansiva “Riesgos y capacidades: Consecuencias políticas de la inseguridad”.

Entre otras fuentes de inseguridad, la llegada de la vejez acarrea: a) el aumento exponencial de los gastos médicos precisamente cuando los ingresos se ven reducidos; b) los bajos niveles de las pensiones y la insuficiente cobertura del sistema; c) la sensación de mayor vulnerabilidad frente a la delincuencia; d) la experiencia de la soledad y la falta de contacto con el mundo social; e) la falta de valoración social.

Para hacer frente a las deficiencias anotadas, se requiere de una serie de ‘políticas anticipatorias’, esto es, de acciones concretas dirigidas a aumentar el tiempo de vida saludable y potencialmente productiva de una persona, lo que no solo contribuirá a una buena calidad de vida de los adultos mayores por el máximo número de años posible, sino que permitirá atenuar el aumento de los gastos en salud que se proyectan. De lo que se trata, en otras palabras, es de anticiparse a los problemas más inminentes que afectarán a la Tercera Edad en los años venideros, introduciendo políticas dirigidas a mantener la funcionalidad de este segmento etario mediante la capacidad de valerse por sí mismo de forma autónoma.

En este sentido, es ineludible una revisión del sistema previsional con el objeto de ampliar su cobertura y mejorar los niveles de las actuales pensiones. Paralelo a ello, también hay otras medidas que se pueden tomar con el objeto de reducir los niveles de inseguridad en este segmento de la población.

Entre las propuestas que se sugieren en los trabajos realizados destacan: a) políticas de promoción de la salud y de los hábitos de vida sana de la población adulta estimulando la alimentación saludable, la actividad física y la recreación, al tiempo que se combate el consumo de tabaco y alcohol. Avanzar en este ámbito permitiría reducir significativamente los principales factores de riesgo que inciden sobre enfermedades cardiovasculares, diabetes y los distintos tipos de cáncer prevenibles y, con ello, aumentaría la probabilidad que las personas de este segmento de la población lleguen a esta etapa de la vida en condiciones de normalidad; b) políticas de prevención primaria que reduzcan la posibilidad de que un adulto mayor funcional se transforme en uno frágil. Entre ellas, programas de salud que den acceso satisfactorio a lentes, audífonos y otros tipos de prótesis que son fundamentales para mantener su funcionalidad, así como políticas dirigidas a la prevención de accidentes asociados a la edad avanzada en materia de vivienda, transporte público y otros; c) políticas de prevención secundaria que minimicen la probabilidad de que un adulto mayor frágil se transforme

en uno terminal, con un enfoque que estimule el autocuidado y una estructura de prestadores incentivados a mantener enfermos estables, sin crisis; d) en el campo laboral, se propone intentar prolongar la participación de los trabajadores de este grupo etario en él, fomentando su formación permanente, al tiempo que se aumenta la flexibilidad que se les ofrece. Esto, porque si bien los adultos mayores no están en condiciones de trabajar durante jornadas regulares, se beneficiarían tanto anímica como económicamente si siguieran insertos de alguna forma en el ámbito laboral; e) en este campo también se propone implementar reformas

En el caso de la inseguridad que experimenta la mujer-madre en el ámbito laboral, hay que señalar que esta es una realidad emergente para la cual la estructura familiar, las leyes sociales y las prácticas culturales aún no se han adaptado, generándose diversas tensiones y dificultades.

legales que eliminen los obstáculos normativos que atentan contra la inserción laboral de los pensionados por vejez (Lizama, 2004), medida que tendría el beneficio adicional de extender los años de funcionalidad de la Tercera Edad, debido a los probados beneficios que la actividad productiva de los mayores de 60 años tiene para sus capacidades cognitivas, que es precisamente uno de los

aspectos más peligrosos de la pérdida de funcionalidad en este grupo de la población en Chile. El hecho de que el desempeño de labores productivas contribuya, además, a mejorar los ingresos monetarios de los pensionados, así como a su sociabilidad y su relación con otros grupos etarios, sugiere que la inserción laboral del sector pasivo –aunque sea por jornadas muy limitadas– es un camino que debe ser incentivado.

2. Compatibilidad de la maternidad e inserción laboral de las mujeres⁽²⁾

En el caso de la inseguridad que experimenta la mujer-madre en el ámbito laboral, hay que señalar que esta es una realidad emergente para la cual la estructura familiar, las leyes sociales y las prácticas culturales aún no se han adaptado, generándose diversas tensiones y dificultades.

(2) Las propuestas de este título se basan en los trabajos efectuados por Mariana Schkolnik, “¿Por qué es tan increíblemente baja la tasa de participación de las mujeres en Chile?”; Carolina Rojas, “¿Cómo afrontar desde la política pública la tensión trabajo v/s atención de los hijos pequeños?”, y Ximena Díaz y Rosalba Todaro, “Riesgos e inseguridades de las nuevas formas de uso flexible del tiempo de trabajo” en el marco del proyecto mencionado en la cita N° 1.

En particular, cada vez son más las chilenas están expuestas a una suerte de doble jornada laboral (una dentro y otra fuera del hogar). Esto es resultado, por una parte, de la persistencia de patrones culturales tradicionales respecto del rol social de la mujer en Chile (esto es, el modelo ‘padre-proveedor, madre-cuidadora’) y, por la otra, de las fuertes transformaciones económicas que hacen crecientemente necesario que la mujer colabore en la adquisición de ingresos monetarios para el grupo familiar, incluso en los casos en que la pareja no está desempleada. Esta situación tiene, además, un importante impacto sobre los niños pequeños, cuyo cuidado no se encuentra bien resuelto en el caso de las madres que trabajan, ocasionando con ello que las mujeres abandonen la vida laboral de las mujeres o bien adopten formas insatisfactorias y riesgosas para resolver el cuidado de sus hijos.

Atendido este contexto, no sorprende la baja tasa de participación femenina en el mercado del trabajo en Chile, la que solo alcanza a un 36% (porcentaje que se reduce a un increíblemente bajo 19%, en el caso de las madres de niños de 0 a 5 años de edad).

Esta situación es aún más compleja en el caso de las mujeres de los estratos socioeconómicos más bajos, en los cuales la participación laboral de la mujer no alcanza siquiera a la mitad de la inserción laboral femenina de los estratos más altos (24,8 y 52%, respectivamente).

Para abordar esta situación, se requiere una política pública decidida que provea salas cuna y jardines infantiles a precios accesibles para niños de 0 a 5 años, cuya prioridad debiera focalizarse en los sectores populares, de manera que quienes más lo necesitan tengan la opción de ingresar al mercado laboral para mejorar así la renta familiar.

También es necesario considerar que la cobertura de cuidado infantil existente a la fecha está mal distribuida entre el grupo de mujeres que tienen hijos entre 3 y 5 años (que alcanza al 45,4%), así como también entre las mujeres con niños de 0 a 2 años de edad (que solo llega al 5,7%).

Atendido este contexto, no sorprende la baja tasa de participación femenina en el mercado del trabajo en Chile, la que solo alcanza a un 36% (porcentaje que se reduce a un increíblemente bajo 19%, en el caso de las madres de niños de 0 a 5 años de edad).

Este dato plantea la necesidad de dar un salto en el segmento de niños de 0 a 2 años de edad. En lo inmediato, además, parece evidente que los esfuerzos por ampliar la cobertura de la educación parvularia deben apoyarse en una revisión de la normativa vigente, la cual únicamente asigna derecho al cuidado infantil a las mujeres que trabajan en empresas con más de 20 trabajadoras. Esta norma desincentiva la contratación de mujeres, porque castiga a los empresarios que contratan trabajadoras y beneficia a las que solo emplean a hombres o a un número limitado de mujeres. Así, lo razonable sería pasar a un sistema donde hombres y mujeres compartan el costo del cuidado infantil, en tanto que los empleadores aporten no en relación a la cantidad de mujeres que contratan, sino al número total de trabajadores que tienen. A ello debe sumarse también un mayor aporte público, puesto que una buena solución a la educación preescolar tiene una gran rentabilidad social, ya que esta es determinante tanto para el inserción laboral de las mujeres como para mejorar los aprendizajes futuros de los niños.

Por otra parte, y en relación con la disponibilidad de mayores grados de flexibilidad horaria para que las mujeres puedan desempeñar trabajos remunerados, se debe pensar en una política de jornada laboral que responda a las necesidades de flexibilidad horaria de los trabajadores y no solo de las empresas. Aquí, los mayores beneficiados pueden ser tanto las mujeres como los jóvenes, que comparten la combinación de la actividad laboral con otras ocupaciones, como es el estudio y el cuidado de los niños. Para resolver estas necesidades, lo fundamental parece ser la expansión de las jornadas parciales y el trabajo a domicilio. Más reticencia causan las jornadas variables, que se ajustan a las necesidades de la empresa, puesto que hacen difícil para el trabajador o trabajadora mantener el control sobre el uso de su tiempo, programarse y coordinarse con los horarios de los demás miembros de la familia. Dado este cuadro, para avanzar en materia de flexibilidad laboral, a la vez de hacerlo con suficiente legitimidad social, parece crucial incorporar a mayores actores al momento de definir el contorno de dichas políticas, al tiempo que ellos se sitúen en una estrategia de mejoramiento de las relaciones laborales y de modernización y fortalecimiento de las organizaciones sindicales.

En el trasfondo de la inserción laboral de las mujeres continúa presente la difícil transición cultural que acompaña a este proceso. Mientras las

expectativas y necesidades de trabajar sigan aumentando, y la presión del trabajo doméstico y del cuidado de los niños no disminuyan, la realidad de las mujeres continuará siendo complicada. Parte de la solución está, sin duda, en el logro de nuevos arreglos al interior de la pareja respecto al modo en que se asumen las tareas del hogar. Las políticas públicas también tienen algo que decir al respecto a través de medidas tales como el post-natal masculino y el estímulo a que los padres, y no solo las madres, utilicen las licencias por enfermedad de los hijos, entre otras iniciativas.

3. Inserción laboral de los jóvenes⁽³⁾

El diagnóstico respecto a la situación de vulnerabilidad social que experimentan los jóvenes que por primera vez se enfrentan al mundo laboral se basa en un dato clave: el altísimo desempleo juvenil en Chile, el que alcanza a 2,5 veces el desempleo total del país (que por sí solo ya es bastante alto, con casi un 9% en la actualidad). Si bien esta tendencia responde a un fenómeno internacional, en Chile es más aguda. Para hacer las cosas más difíciles, se suma el hecho de que el desempleo juvenil no representa algo circunstancial o contingente que se pueda atribuir simplemente a la crisis asiática o a sus consecuencias, ya que aun durante la ‘época dorada’ de crecimiento económico y la baja general del desempleo que nuestro país experimentó en el periodo 1990-1998, la tasa de desocupación juvenil subió en cinco puntos (de 16,7% a 21,2%). Esto último sugiere que el problema es mucho más complicado que lo que aparece a primera vista.

El diagnóstico respecto a la situación de vulnerabilidad social que experimentan los jóvenes que por primera vez se enfrentan al mundo laboral se basa en un dato clave: el altísimo desempleo juvenil en Chile, el que alcanza a 2,5 veces el desempleo total del país (que por sí solo ya es bastante alto, con casi un 9% en la actualidad).

Las dificultades de los jóvenes para insertarse laboralmente generan una inseguridad distinta de las anteriores. En efecto, muchos jóvenes des-

(3) Las proposiciones de esta sección se basan en los trabajos realizados por Víctor Tokman, “Desempleo juvenil en Chile”, e Ignacio Larraechea, “Desempleo Juvenil en Chile: Propuestas a luz de la evolución en los años 90”, escritos en el marco del proyecto “Riesgos y capacidades: Consecuencias políticas de la inseguridad” desarrollado por Expansiva.

empleados no tienen problemas de sobrevivencia puesto que aún dependen de sus padres, viven con ellos y pueden subsistir en base a trabajos esporádicos o ‘pololos’ que les permiten cubrir sus gastos personales, así como aportar algo a la familia. Sin embargo, la prolongación de esta situación de precariedad por largos años, en la que no se estudia ni se trabaja y no se hace algo significativo, tiene un importante impacto en la inserción social del joven que la sufre. Su identidad, en plena formación, sus redes sociales como adulto, que se empiezan a definir en esa etapa, experimentan un desmedro permanente cuando la juventud transcurre en esta especie de vacío y marginación.

A ello se suma la casi nula presencia de los jóvenes en política, debido a los ínfimos niveles de inscripción electoral que registra este segmento. Este hecho ha ocasionado una escasa presencia en la agenda pública de los problemas que afectan a este grupo, puesto que ocuparse de ellos se considera “poco rentable” en términos electorales. Como resultado de esto, en esta etapa no se ejercen plenamente los derechos ciudadanos y existe una sensación general de que la democracia es poco acogedora y sensible a los problemas juveniles, lo cual constituye un nuevo factor de vulnerabilidad.

Sin duda, la contrapartida de estos problemas se encuentra en la creciente cobertura del sistema escolar y de Educación Superior, lo que ha permitido que los estudiantes accedan a grados de escolaridad nunca vistos en Chile. Hoy, uno de cada tres jóvenes asiste a alguna modalidad de E.S. y siete de cada 10 personas que lo hacen tienen padres que nunca tuvieron esa oportunidad. Hoy muchos más jóvenes pueden estudiar, aunque quienes no logran hacerlo soportan una gran frustración. La cobertura de la Enseñanza Media, actualmente obligatoria, hace que el contingente de jóvenes que aspira a seguir estudiando sea mucho más alto. Años atrás, esos jóvenes no terminaban el colegio y, por lo tanto, sus expectativas de permanecer en el sistema eran nulas. Hoy, pese a que las oportunidades han crecido aceleradamente, las expectativas lo han hecho aún más. Y es ahí donde el problema del desempleo alcanza su mayor gravedad, porque son precisamente los jóvenes que no logran estudiar los que lo enfrentan.

Adentrándose más en el problema del desempleo juvenil, se constata que este ha sido tradicionalmente más extendido entre los jóvenes menores de 20 años, grupo que en el periodo reseñado registró una tasa de desem-

pleo de 29,9%. De ellos, el segmento más afectado es el que corresponde a las mujeres, cuya tasa de desocupación llegó a 36,6%.

Repitiendo un patrón que también se da respecto de otras situaciones de vulnerabilidad social que se analizan en este documento, al examinar la distribución de las tasas de desempleo por estratos socioeconómicos se observa que la desocupación juvenil es mucho más seria en los sectores más pobres. De hecho, del número total de jóvenes sin empleo en Chile, el 42% pertenece al quintil de ingresos más bajos, mientras que solamente un 5% de los jóvenes desocupados de este grupo de la población pertenece al quintil de ingresos más alto.

Si bien el problema del desempleo juvenil es una realidad que afecta a numerosos países en el mundo –desarrollados o no– el diferencial de la desocupación juvenil en relación a la de la población general tiende a crecer en el tiempo. En Chile se observa que en períodos de aumento del desempleo total, asociados a la desaceleración del crecimiento, el desempleo juvenil tiende a elevarse más que el promedio y, por ende, su diferencial crece.

En lo que dice relación con las causas de la tan alta tasa de desocupación laboral de los jóvenes respecto de los adultos, se encuentra: a) la insuficiencia dinámica de la economía en cuanto a su capacidad para crear empleo, incluso en periodos de crecimiento; b) las exigencias o expectativas de los jóvenes en relación al empleo esperado, las que son superiores a la oferta laboral efectivamente disponible; c) la insuficiencia de capital humano, tanto de educación como de experiencia; y d) los factores relacionados con la rigidez del mercado de trabajo y, en particular, con los costos de contratación y despido de los jóvenes y los niveles de los salarios mínimos.

Partiendo de este escenario, hay políticas públicas que pueden ayudar a mejorar la situación, entre ellas: a) políticas dirigidas a mejorar la educa-

(...) al examinar la distribución de las tasas de desempleo por estratos socioeconómicos se observa que la desocupación juvenil es mucho más seria en los sectores más pobres. De hecho, del número total de jóvenes sin empleo en Chile, el 42% pertenece al quintil de ingresos más bajos, mientras que solamente un 5% de los jóvenes desocupados de este grupo de la población pertenece al quintil de ingresos más alto.

ción y la capacitación de los jóvenes, enfatizando el desarrollo de competencias relevantes para las necesidades del mundo laboral; b) políticas orientadas a fomentar el retorno a la escuela de los desertores, evitando su ingreso prematuro al mercado laboral; c) el desarrollo de políticas para dotar a los jóvenes de formación profesional; d) la disponibilidad de contratos de trabajo más flexibles que involucren menores costos para el caso de los menores de 24 años; e) la creación de subsidios a la contratación de jóvenes como mecanismo para compensar a los empresarios por las insuficiencias de sus capacidades.

En particular, es necesario potenciar la enseñanza técnica en sus distintos niveles. La educación media técnico-profesional requiere de una modernización y actualización de su oferta a la luz de los nuevos perfiles que demanda el mercado laboral, buscando al mismo tiempo superar su vocación de “educación de término” para transformarla en una posibilidad de Enseñanza Media que prepare para el mercado laboral, pero que no excluya la continuación de los estudios superiores. De hecho, en Chile existe un segmento insignificante que comienza a expandirse, el cual está conformado por los estudiantes trabajadores que cursan la Educación Superior al mismo tiempo que participan en el mercado laboral. Esto también requiere de una fuerte modernización de la enseñanza técnico-profesional, que en nuestro país está estancada tanto en cobertura como en calidad. En este ámbito faltan sistemas adecuados de certificación de la calidad de los títulos así como de ayuda estudiantil, los que paradójicamente están limitados a las universidades. Ambos temas están en discusión en distintos proyectos legislativos actualmente en trámite.

Otras propuestas parten de la relativamente exitosa experiencia del programa denominado “Chile Joven”. Con una inversión de 80 millones de dólares, esta experiencia capacitó durante ocho años a más de 100.000 jóvenes en situación de vulnerabilidad ocupacional, al tiempo que los vinculaba con empresas productivas. A partir de él se sugiere la implementación de una red de instituciones de formación para el trabajo que incluya diversas alternativas de formación debidamente concordadas y respaldadas por los potenciales empleadores. Dicha red debiera ofrecer planes de estudio de por lo menos un año de duración dirigidos al desarrollo de las llamadas ‘competencias de empleabilidad’ (alfabetización

funcional, alfabetización digital, capacidad de comunicación, trabajo en equipo y creatividad, entre otras habilidades), complementadas por dispositivos de atracción para una población de jóvenes difícil de motivar y muy proclive al abandono.

En la perspectiva de fortalecer el peso de la población juvenil en la agenda pública, un paso importante es cambiar el sistema de inscripción electoral. El que hoy rige genera un incentivo evidente a excluirse del cuerpo electoral. Esto, porque establece la obligatoriedad del voto y de sus cargas (como ser designado vocal de mesa) solo para los inscritos, en tanto que deja la inscripción electoral como voluntaria. Si bien la instauración de un sistema de inscripción automática y voto voluntario no eliminará el distanciamiento de muchos jóvenes con la política, sí los puede transformar en potenciales electores. Eso, por sí solo, se traducirá inevitablemente en un mayor interés y preocupación del sistema político por las temáticas juveniles, tanto del desempleo así como de otras materias, además de añadirle una dosis de mayor competencia a las elecciones. Una consecuencia que será saludable para el sistema democrático chileno.

En la perspectiva de fortalecer el peso de la población juvenil en la agenda pública, un paso importante es cambiar el sistema de inscripción electoral. El que hoy rige genera un incentivo evidente a excluirse del cuerpo electoral. Esto, porque establece la obligatoriedad del voto y de sus cargas (como ser designado vocal de mesa) solo para los inscritos, en tanto que deja la inscripción electoral como voluntaria.

Autor



Carolina Tohá

Ph.D. Ciencias Políticas, Universidad de Milán. Ex Subsecretaria General de Gobierno, hoy se desempeña como Diputada por Santiago.



Javier Couso

Ph.D. Ciencias Políticas, U.C. Berkeley. Académico de la Universidad Diego Portales.



© 2005 Expansiva

La serie **en foco** recoge las investigaciones de Expansiva que tienen por objeto promover un debate amplio sobre los temas fundamentales de la sociedad actual.

Este documento, cuya presente edición fue editada por Cony Kerber, es parte de un proyecto que la Corporación organizó con el objetivo de revisar y actualizar sus investigaciones realizadas hasta la fecha. Esta iniciativa fue coordinada por Jorge Marshall y Uca Pérez.

Estos documentos, así como el quehacer de Expansiva, se pueden encontrar en www.expansiva.cl

Se autoriza su reproducción total o parcial siempre que su fuente sea citada.

